



## SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

**Proceso:** ORDINARIO LABORAL  
**Demandante:** WILLIAM VÁSQUEZ RAMÍREZ  
**Demandado:** COLPENSIONES  
**Procedencia:** JUZGADO ONCE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN  
**Providencia:** SENTENCIA n.º 17  
**Radicado n.º:** 05001-31-05-0011-2019-00291-01 (O2-22-337)

En Medellín, a los dieciséis (16) días del mes de febrero de dos mil veintitrés (2023), en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 15 de la Ley 2213 de 2022 y en consonancia con el artículo 10 del Acuerdo PCSJA20-11567 del Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados **CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES**, **SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE** y **VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**, quien actúa como magistrado sustanciador, procede a decidir el recurso de apelación propuesto por la parte actora dentro del proceso ordinario instaurado por **WILLIAM VÁSQUEZ RAMÍREZ** en contra de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, bajo el radicado único nacional n.º 05001-31-05-0011-2019-00291-01 (O2-22-337).

Se deja constancia que el respectivo proyecto de fallo fue puesto a consideración de la Sala y estando debidamente aprobado, se procede a proferir la siguiente, **SENTENCIA**:

### 1. ANTECEDENTES

A través de gestor judicial, WILLIAM VÁSQUEZ RAMÍREZ persigue que se declare que su estado de invalidez se estructuró en el año 2022, y en consecuencia, que se condene al demandante a pagarle la pensión de sobrevivientes causada por su padre, en calidad de hijo inválido, desde el 19 de agosto de 2007, los intereses moratorios o subsidiariamente la indexación, y las costas procesales, bajo el fundamento de que el 19 de agosto de 2007 falleció su padre, WILLIAM DE JESÚS VÁSQUEZ SALAZAR, quien era pensionado por vejez a cargo de COLPENSIONES, y al momento del óbito dependía económicamente de aquel, debido a que fue diagnosticado con SIDA desde el año 2002;

que fue calificado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia (JRCIA) con una pérdida de capacidad laboral (PCL) del 60,60%, estructurada desde el 12 de julio de 2017; que el 5 de febrero de 2019 solicitó la pensión como hijo inválido sobreviviente, la que le fue negada por Resolución SUB 83457 del 5 de abril de 2019, en razón a que la estructuración de su invalidez se dio con posterioridad a la fecha del fallecimiento.

### **1.1. Trámite de primera instancia y contestación de la demanda**

La demanda fue admitida por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín mediante auto del 23 de julio de 2019 (doc. 02 pág. 196), ordenando su notificación y traslado a la accionada.

Una vez notificada (doc. 02 pág. 204), la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, contestó la demanda el 16 de octubre de 2019 (doc. 02 pág. 207 y ss.) oponiéndose a las pretensiones de la demanda por carecer de fundamentación fáctica y legal, y en esa dirección, propuso las excepciones de mérito que rotuló: inexistencia de la obligación, inexistencia de intereses moratorios, improcedencia de la indexación de las condenas, buena fe, imposibilidad de condena en costas, prescripción, y compensación.

Mediante memorial del 3 de marzo de 2021, el poderhabiente judicial de la parte actora informó sobre el fallecimiento del demandante, ocurrido el 31 de marzo de 2019, aportando el correspondiente registro civil de defunción (doc. 06 pág. 2); de suerte que, no sería posible practicar un dictamen de PCL dentro del trámite procesal.

### **1.2. Decisión de primer grado**

El proceso se dirimió en primera instancia mediante sentencia proferida el 10 de agosto de 2022 (docs. 12 y 13), oportunidad en la cual el cognoscente de instancia absolvió a COLPENSIONES de todas las pretensiones incoadas por el señor WILLIAM VÁSQUEZ RAMÍREZ, gravándolo en costas procesales.

### **1.3. Apelación**

La decisión adoptada fue apelada por el apoderado judicial de la parte demandante, quien al efecto asentó que los dictámenes de las juntas no son pruebas solemnes, por lo que en estos casos el juez tiene libertad probatoria, siendo que el dictamen de la JRCIA

estableció como fecha de estructuración la de la última cita médica, a pesar de reconocer que el diagnóstico del VIH fue desde el año 2004 y desconociendo la condición de drogadicto del demandante referida por los testigos; mientras que la historia clínica obrante en el expediente refleja que desde el año 2004 el demandante se encontraba discapacitado para realizar cualquier actividad productiva, según informativo del que daba cuenta de un absceso hepático como reposa en la misma valoración médica del 20 de diciembre de 2002. A más de que el 7 de octubre de 2004 fue diagnosticado con dolor abdominal intenso y en malas condiciones generales, y el 21 de julio de 2007, fue diagnosticado con una insuficiencia pulmonar, siendo que también sufría cáncer rectal. Circunstancias de las que se desprende que la enfermedad degenerativa sufrida por la parte actora, configuró el estado de invalidez antes del año 2007.

## 2. ANALISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, advirtiéndose que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66 A del C.P.L. y S.S., el estudio del fallo impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia dealzada, para lo cual se plantea el estudio del siguiente:

### 2.1. Problema jurídico:

El *thema decidendi* en esta litis, es establecer si el señor WILLIAM VÁSQUEZ RAMÍREZ en calidad de hijo inválido supérstite, acreditó los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes causada por el señor WILLIAM DE JESÚS VÁSQUEZ SALAZAR (q.e.p.d.), concretamente, si acreditó haber estructurado la condición de invalidez antes del deceso del causante, y en caso afirmativo, si hay lugar al reconocimiento de las demás pretensiones de la demanda.

### 2.2. Tesis de la sala y solución a los problemas jurídicos planteados.

El sentido del fallo de esta Corporación será **confirmatorio**, en cuanto el accionante no demostró que hubiere estructurado el estado de invalidez al momento del fallecimiento, de conformidad con los planteamientos que pasan a exponerse:

### 2.2.1. Pensión de sobrevivientes

Antes de continuar con el análisis, resalta esta Colegiatura, que no hay controversia en cuanto a que el señor WILLIAM DE JESÚS VÁSQUEZ SALAZAR dejó causada la pensión de sobrevivientes a favor de sus posibles beneficiarios, puesto que COLPENSIONES aceptó en Resolución SUB 83457 del 5 de abril de 2019 (doc. 02 pág. 191) que el extinto ISS le reconoció pensión de vejez desde el 1º de noviembre de 1995 a través de Resolución n.º 9050 del 12 de diciembre de 1995.

Sentado lo anterior, advierte la Sala que al *sub lite* le es aplicable el régimen legal contenido en los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la ley 797 de 2003, dado que el causante falleció el 19 de agosto de 2007 (doc. 02 pág. 16). Concretamente, conviene resaltar el contenido del art. 13 ibídem que menciona quiénes pueden acceder a la prestación, de cuyo texto se trasunta el siguiente aparte:

*“c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar cuándo hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993;”*

De la lectura del texto legal trasunto, se desprende que los requisitos que deberá acreditar la parte actora para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes son: (i) ser hijo del causante, (ii) una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50% estructurada antes del fallecimiento del causante, y (iii) la dependencia económica respecto del causante.

La calidad de hijo se acreditó mediante copia del registro civil de nacimiento del demandante (doc. 02 pág. 14), según el cual es hijo del señor WILLIAM DE JESÚS VÁSQUEZ SALAZAR.

Así mismo, se encuentra probado que actualmente el demandante contaba con un porcentaje de PCL superior al 50 %, como consta en el dictamen n.º 70354-2017, expedido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia el 1º de febrero de 2018 (doc. 02 págs. 18 y ss.), que le asignó al demandante una PCL del 60,6 %.

No obstante, se señaló en dicho dictamen que el porcentaje de PCL se estructuró apenas el 12 de julio de 2017, fecha muy posterior al óbito.

Por manera que, versa el punto de central de la discusión en definir si para el 19 de agosto de 2007, el demandante acreditaba encontrarse en estado de invalidez, es decir, si para tal data contaba con un porcentaje de PCL igual o superior al 50 %.

Antes de continuar con el análisis, importa subrayar por la Sala que: *“el principio de favorabilidad en la interpretación, (...) debe recordarse que no es predicable frente a la valoración de pruebas, sino como se dijo en precedencia, tiene cabida es con relación a una duda que surja sobre la aplicación de dos normas o su hermenéutica jurídica...”* (SL14027-2016), vale decir, que el principio tuitivo solo tendría aplicación en el ámbito de la interpretación normativa, más no en el de la valoración de la prueba, nicho en el que debe aplicarse las reglas que informan la carga procesal probatoria de los contendientes judiciales, y siendo que la valoración de los dictámenes es una cuestión de carácter probatorio, en el *sub lite* no procede la aplicación del principio en cita.

Ahora bien, frente los dictámenes de calificación de PCL expedidos por las juntas de calificación, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, adocina *“(...) la importancia intrínseca que tienen esos dictámenes de pérdida de la capacidad laboral, por emanar de autoridades científico técnicas autorizadas por el legislador y por su deber de fundamentarse en la historia clínica, exámenes médicos y demás observaciones diagnósticas relativas al estado de salud del paciente. Por ello, (...), en principio, el juez del trabajo está obligado a observarlos y respetarlos, en el marco de sus facultades de valoración probatoria. (...)”* (SL3992-2019, reiterada en las SL4571-2019, SL 2984-2020 y SL1578-2022).

Empero, en el mismo estanco doctrinal, *“(....) ha determinado que dichos dictámenes no constituyen una prueba definitiva, incuestionable o inmodificable en el marco del proceso ordinario, ni muchos menos una prueba de carácter ad substantiam actus. (...) dichas experticias constituyen una prueba más del proceso que el juez puede valorar de manera libre, dentro del marco de sus facultades de libre valoración de la prueba y libre formación del convencimiento. (...). En dicha medida, no es cierto que, (...), la calificación del estado de invalidez constituya una cuestión técnica ajena al conocimiento de los jueces, pues, por el contrario, es precisamente el juez del trabajo el que tiene el poder jurisdiccional para establecer el estado de invalidez y todas sus variables asociadas, esto es, entre otras, el origen de la enfermedad o accidente, la fecha de estructuración y el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral. (...), de manera tal que (...) los dictámenes de las juntas de calificación, a pesar de su importancia, no representan conceptos definitivos e inmutables,*

*sino pruebas del proceso que bien pueden ser revaluadas o desvirtuadas por el juez del trabajo, en ejercicio de sus libertades de valoración probatoria. (...)” (SL3992-2019, reiterada en las SL4571-2019, SL 2984-2020 y SL1578-2022).*

Es decir, que si bien el juzgador puede apartarse de la calificación de invalidez proveniente de las juntas de calificación, “*«...porque exhiba una equivocación grave o porque los razonamientos del perito encierren una infracción legal...» (SL3090-2014)*, para ello “*debe apoyarse en otras pruebas que le ofrezcan una mejor convicción, pero no tasar arbitraria e inconsultamente el estado de invalidez” (SL3090-2014).*

Conforme lo anterior, en el plenario se cuenta con el dictamen n.º 70354-2017, expedido en sede administrativa por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia el 1º de febrero de 2018 (doc. 02 págs. 18 y ss.), la cual le asignó al actor una pérdida de capacidad laboral del 60,6 %, estructurada el 12 de julio de 2017.

Recuento necesario en punto a resolver el problema jurídico planteado, puesto que la censura hecha por el apoderado judicial de la parte actora, se funda en que las condiciones de salud calificadas por la JRCIA, se registran en la historia clínica del accionante desde el año 2004.

Argumento que, una vez valorada la totalidad de la prueba obrante en el legajo, en nada afecta la fuerza de convicción del referido dictamen, toda vez que el mismo efectivamente tuvo en cuenta que el accionante fue diagnosticado con VIH desde el año 2004, y que había presentado afecciones pulmonares, sarcoma, y abscesos hepáticos (doc. 02 pág. 19), por manera que tal experticia sí tuvo en cuenta tanto los padecimientos señalados por la alzada, como su fecha de diagnóstico, solo que no encontró prueba de que para el año 2004 los mismos le generaren al actor una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50 %, toda vez que cuando un paciente presenta varios diagnósticos médicos, como es el caso del accionante, la estructuración “*debe ser determinada en el momento en el que la persona evaluada alcanza el cincuenta por ciento (50%) de pérdida de la capacidad laboral u ocupacional*”, y no en el momento en que aparecen los primeros síntomas del estado de morbilidad que presente.

Ello así, refulge palmar que lo que confuta la alzada no es que para el año 2004 el demandante tuviere diagnosticadas diversas afecciones de salud, sino que aproximadamente desde tal data las mismas afectaban su salud a tal grado que fue para esa época en que se estructuró su estado de invalidez. Sin embargo, no obra prueba

alguna en la historia clínica de que para tal anualidad las condiciones de salud del accionante le asignaren una PCL del 50% o más, en tanto a pesar de que las mismas efectivamente se reflejan en la historia clínica del demandante (doc. 01 págs. 24 a 185).

*A contrario sensu*, basta observar que la valoración médica efectuada en el antedicho dictamen, refiere que en la valoración médico laboral efectuada presencialmente al accionante el 19 de diciembre de 2017, éste manifestó haber trabajado como estilista independiente cuando menos hasta 3 años antes, o sea, hasta el año 2014, de lo que se sigue es que ciertamente sus patologías le permitieron laborar al menos 10 años después del diagnóstico de VIH.

Igualmente, esgrime el recurrente que en el dictamen no se valoró la adicción del accionante a los estupefacientes, disquisición frente a la cual ha de precisarse que no obra prueba alguna en la historia clínica de tal adicción, siendo que tal afección de salud únicamente fue referida por las declaraciones testimoniales, testigos que a todas luces carecen de un criterio técnico-científico suficiente que desvirtúe de manera idónea el dictamen controvertido.

Con lo expuesto, basta para despachar desfavorablemente el recurso de alzada, en la aplicación estricta del principio de consonancia, en cuanto a que no basta con alegar que la litigiosa por activa tenía síntomas de los padecimientos que derivaron en su PCL desde el año 2004, sino que además debía probarse la razón por la cual la mera existencia del diagnóstico fue determinante para concluir que la PCL que actualmente padece el actor se estructuró desde la aparición de los primeros síntomas, lo cual no se hizo, pues se itera, no existe en la historia clínica valoración alguna que permitiera establecer que para la época de los primeros diagnósticos, los padecimientos médicos del demandante lo afectaban al punto de tener una PCL igual o superior al 50 %.

En este orden de ideas, al revisar el dictamen n.º 70354-2017, expedido en sede administrativa por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia el 1º de febrero de 2018 (doc. 02 págs. 18 y ss.), la Sala avizora que el mismo se encuentra apegado a lo dispuesto en el Decreto 1507 de 2014, y que el mismo no exhibe “(...) *una equivocación grave o (...) una infracción legal...*» (SL3090-2014), pues se itera, el dictamen en cuestión que sí se valoró, que el accionante fue diagnosticado con VIH desde el año 2004, y que había presentado afecciones pulmonares, sarcoma, y abscesos hepáticos (doc. 02 pág. 19), así como que no podía la JRCIA valorar la alegada

drogadicción del accionante, en razón a que no existe diagnóstico médico al respecto, cumpliendo así con los requerimientos del Decreto 1507 de 2014 y su tabla anexa.

A partir del recuento precedente, se extrae que, de acuerdo con las reglas de la sana crítica que gobiernan el principio de libre formación del convencimiento, el dictamen practicado por la JRCIA es sólido, claro, exhaustivo y preciso en su sustentación y fundamentos, puesto que para su emisión se aplicaron adecuadamente las reglas del Manual Único para la Calificación de la Invalidez recogidas en el Decreto 1507 de 2014, que orientan la valoración del estado de la invalidez, además de atender exclusivamente a las pruebas que obran en el proceso y en la historia clínica.

Corolario de lo expuesto, al refulgir palmaria la ausencia de pruebas que ofrezcan mejor convicción que el dictamen de la JRCIA, no hacen falta más disquisiciones para impartir confirmación a la sentencia objeto de estudio, en tanto con acierto estimó el cognoscente de instancia que el accionante no ostentaba la condición de invalidez para la fecha del fallecimiento del causante, pues de lo contrario, el juez estaría tasando arbitraria e inconsultamente de un experticia técnica, la fecha de estructuración del estado de invalidez del actor.

### **2.3. COSTAS**

Costas en esta instancia a cargo de la parte actora, por haberse resuelto desfavorablemente el recurso de apelación propuesto, y a favor de COLPENSIONES, fijándose las agencias en derecho en la suma de **\$1.160.000**, equivalente a un (1) SMLMV. Las de primera se confirman.

### **3. DECISIÓN**

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

#### **RESUELVE:**

**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia materia de apelación proferida el 10 de agosto de 2022 por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.




**SEGUNDO: COSTAS** en esta instancia a cargo del señor WILLIAM VÁSQUEZ RAMÍREZ y a favor de COLPENSIONES, fijándose las agencias en derecho en la suma de **\$1.160.000**. Las de primera se confirman.

Lo resuelto se notifica mediante **EDICTO**, acogándose el criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, vertido en la reciente providencia AL2550-2021 del 23 de junio de 2021, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.


**Cópiese, comuníquese y cúmplase.**



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO  
Magistrado Ponente



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES  
Magistrado



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE  
Magistrada

**CONSTANCIA SECRETARIAL**

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS  
Secretario